

Crisis francesa, crisis de la izquierda

Informe de un socialdemócrata comprometido

Mitchell Cohen

Mitchell Cohen es codirector de la revista *dissent* (Nueva York). Es profesor de teoría política en el Baruch College, de la City University of New York. Este artículo se publicó originalmente en *dissent* (verano 2006).

París: la primera cosa que noté al llegar en Año Nuevo fue el elevado número de personas sin techo en un invierno especialmente frío. Viajo con frecuencia a París, pero la impresión que me dio es que han aumentado exponencialmente los últimos años. En los meses posteriores vi más y más gente en la calle, pero no sin techo sino manifestantes. Primero en grupos más o menos pequeños, luego en número apreciable, finalmente en manifestaciones imponentes. El blanco principal de las protestas era un proyecto gubernamental, el CPE (*Contrat première embauche* o «contrato de primer empleo»), que autorizaba a las grandes empresas a despedir a los empleados bajo esta modalidad, de edad inferior a 26 años, concretamente a despedirlos sin más explicaciones dentro de un plazo de dos años a partir de su contratación. Pero el panorama es más amplio que eso. Había muchas manifestaciones. Una sociedad realmente incomodada se estaba manifestando de manera muy ruidosa.

Si uno vive cerca de la plaza Bastilla, que es donde yo vivía, lo lógico es contemplar manifestaciones. La protesta más famosa realizada en ese lugar se convirtió en una revolución de importancia histórica universal. Una columna alta, verdosa, se alza donde estaba la célebre fortaleza en 1789. Está rodeada diariamente por un tráfico caótico. En lo más alto, inclinado hacia adelante, un «Génie de la Liberté», dorado y alado, blande una antorcha en una mano y unas cadenas rotas en la otra. En la base de la columna hay una inscripción que dice: «En homenaje a los ciudadanos franceses que empuñaron las armas y lucharon en defensa de la libertad del pueblo». Estas palabras conmemoran la Revolución de 1830, por la que una monarquía absolutista fue sustituida por una constitucional, no la Revolución de 1789, cuando una titubeante monarquía absolutista fue reemplazada por una constitucional, que a su vez se vio desplazada por una república que acabó consumida por el Terror que fue a su vez sustituida por una especie de situación constitucional intermedia, luego por Napoleón y luego por una monarquía conservadora que fue derribada justo cuando empieza esta frase, en 1830.

Si uno se asoma hoy a la plaza desde la esquina que da a la rue St. Antoine descubrirá detrás de la columna una mole brillante, no una fortaleza, sino el equivalente arquitectónico de una ballena de vidrio y metal varada en una playa. Es el nuevo Palacio de la Ópera de París, inaugurado en 1989, coincidiendo con el bicentenario de la Revolución, por quien era a la sazón presidente de la República, el ya fallecido François Mitterrand. Es uno de los muchos imponentes edificios públicos construidos como tributo a su ego socialista. Cuando contemplaba el 28 de mayo de 2006 el

Palacio, descubrí que una gran pancarta colgaba del edificio. En letras rojas y negras ponía: «*Opéra Bastille en Grève*». La Ópera estaba en huelga, pero no por una disputa laboral de las habituales. Otra pancarta decía: «*Retrait du CPE*», «Fuera el CPE». Los sindicatos habían convocado una huelga general de un día en todo el país. Detrás de mí había hileras de policías en trajes acolchados y con las porras en la mano. Durante unas cuatros horas desfilaron por la plaza manifestantes que gritaban sus consignas. Las pancartas indicaban la pertenencia de los manifestantes a diferentes sindicatos o bien a sus universidades y liceos respectivos, así como a diferentes partidos de izquierda. Este inmenso espectáculo de descontento era pacífico, si bien luego me enteré de que se habían producido algunos enfrentamientos y destrozos tras la marcha.

La escena era muy diferente de los choques que había presenciado pocas semanas antes en la plaza de la Sorbona, contigua a los edificios más venerables de la Universidad de París. Aquí, en el escenario de la legendaria revuelta estudiantil de 1968, pude contemplar a unos dos mil manifestantes, en su mayoría estudiantes, supongo, que se movían adelante y hacia atrás enfrentados a filas compactas de policías. Una barreras metálicas protegían la universidad, que había sido ocupada (causando desperfectos). Los manifestantes coreaban consignas, ondeaban algunas banderas negras, aquí y allá se veía humo en el aire, probablemente eran gases lacrimógenos. Un profesor francés del siglo XIX emergía allí entre los agresivos manifestantes y los cascos de la policía. Era Auguste Comte, o más bien la estatua del «padre de la sociología» que preconizó la idea positivista según la cual era posible estudiar la sociedad tan «científicamente» como estudian sus materias los científicos de la naturaleza, estableciendo resultados y leyes «objetivas». ¿Qué habría pensado de estos enfrentamientos? Detrás de la disputa en torno al CPE late una vieja controversia sobre si las «leyes» del mercado son o no son «objetivas», «naturales», y si deberían o no gobernar la vida laboral y, en definitiva, la vida social en su conjunto.

Buena parte de los periódicos decían que quienes protestaban sabían contra lo que estaban, pero no a favor de qué estaban. ¿Qué política podría aliviar el problema del paro? ¿Puede mantener Francia sus niveles de protección social en una «época de globalización»? Parecía haber pocas respuestas, aunque sí alguna dosis del espíritu del 68. En la Bastilla vi gente con camisetas en las que no ponía *Grève générale* (huelga general) sino *Rêve générale* (sueño general). Pero ¿qué clase de sueño? La última vez que vi una manifestación tan grande fue en junio de 1989, en una enorme plaza pública de Budapest. Un cuarto de millón de húngaros rendían homenaje a los líderes de su Revolución de 1956, que fueron ejecutados. Aquella manifestación señalaba asimismo un momento histórico de alcance mundial, el principio del fin del comunismo, y tenía lugar a escasas semanas de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución que se inició en la Bastilla. Un filósofo húngaro me comentó, no sin cierta tristeza, que el fin del comunismo se estaba produciendo en ausencia «de cualquier imaginación», meramente como un «alivio». Entre ese momento y 2006 los países ex comunistas de Europa han ingresado en la Unión Europea, o suspiran por hacerlo. Francia, entretanto, lucha por situarse en el mundo y por encontrarse a sí misma en su casa. En mayo de 2006 una encuesta del CEVIPOF (Centro para el estudio de la vida política francesa) indicaba que el 76 por ciento de los franceses piensa que la siguiente generación tendrá menos oportunidades de éxito que la suya. Las lumbreras del país están muy preocupadas con el «declivismo».

En picado

La crisis francesa es también la crisis mundial de la izquierda democrática de hoy. Esto puede no ser evidente a primera vista, porque el gobierno que se vio asediado la pasada primavera era un gobierno de centro-derecha y la izquierda francesa fue la inmediata beneficiaria. La popularidad del presidente Jacques Chirac y de su primer ministro y *protégé* Dominique de Villepin se vino abajo. Aunque el Partido Socialista (PS) se sumó a «los acontecimientos», más que encabezarlos, unos dieciocho mil nuevos afiliados ingresaron en marzo. ¿Por qué estamos ante una crisis tanto de la izquierda como de los gobernantes neogaullistas? Las razones se hacen más claras si analizamos con algún detalle el escenario francés, su contexto e implicaciones.

La clase política de la Quinta República sufrió hace poco el peor sobresalto desde Mayo de 1968. El electorado le dio la espalda el año pasado en un referéndum nacional acerca de la propuesta de una Constitución europea. La mayoría de líderes del país, de todo el espectro, exhortaba a votar «sí». Los ciudadanos votaron «no». En parte había algo de resentimiento frente a una elite que parece decirles a los ciudadanos: «Nosotros hablamos, vosotros escucháis». Villepin se convirtió en primer ministro poco después de este «no», pero no parecía que lo hubiese oído. Hizo aprobar el CPE por la Asamblea Nacional el pasado invierno sin debate o diálogo público con los grupos afectados (como los sindicatos). Así que el público volvió a decir «no». La portada de *Libération*, el diario de izquierdas, dio en el clavo el 20 de marzo. Presentaba una imagen de Villepin de espaldas a los lectores con una pancarta que decía: *A la rue!* (¡A la calle!). Un sondeo publicado el mismo día en el diario indicaba que el 71 por ciento de los franceses pensaba que las manifestaciones contra el CPE denotaban «una crisis social profunda», no un problema momentáneo.

A final de marzo *Le Monde* informaba que el 63 por ciento de la población se oponía a la ley. Sin embargo, Chirac y Villepin consideraban que sería «antidemocrático» retirarla porque había sido aprobada por una asamblea legislativa debidamente elegida. Pero si un proyecto suscita tanto antagonismo y si las encuestas dicen que dos tercios de la ciudadanía se oponen a él, la «democracia» pasa a ser una justificación bastante débil para seguir adelante, especialmente si el abanderado del proyecto, el primer ministro, no ha sido nunca elegido para los múltiples cargos que ha ocupado (ministro de Exteriores, ministro del Interior, secretario general de la Presidencia).

Angst y disturbios

Chirac ganó de nuevo las presidenciales en 2002 por una amplia mayoría (casi el 80 por ciento), pero ello fue debido a un fallo técnico en el diseño constitucional. Su victoria fue un poco como la de George Bush en 2000 y Chirac no ha dejado de comportarse en algún aspecto como el presidente americano. Bush perdió en voto popular, pero ganó constitucionalmente la presidencia en el Colegio Electoral, y procedió a tratar imperativamente a todo el mundo salvo a sus leales. Chirac parece haber tomado su reelección como una consagración e incluso parece que pensó que su victoria se debió al entusiasmo popular.

El sistema electoral a dos vueltas vigente en Francia permite que se vote sin ataduras por cualquiera de los candidatos en la primera ronda. En la segunda se produce una polarización en torno a los dos candidatos mejor situados, tradicionalmente representantes de los dos grandes bloques, derecha e izquierda. Pero en 2002 el candidato socialista fue eli-

minado en la primera vuelta. En efecto, la extrema izquierda le hizo a Lionel Jospin lo que Ralph Nader le hizo a Al Gore, permitiendo que Jean-Marie Le Pen, el apóstol ultra del chovinismo nacional, lo superase. El margen de votos era estadísticamente menor, pero psicológicamente muy importante. Y Chirac había conseguido apenas un 20 por ciento en la primera vuelta. Como es sabido, los electores franceses se decantaron por la única opción lógica cuando se llegó a un enfrentamiento entre Chirac y Le Pen.

Si la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2007 generan resultados muy fragmentados y consiguientemente alternativas poco estimulantes en la segunda, puede que se cuestione el orden constitucional en vigor. Charles de Gaulle diseñó la Quinta República para poner remedio al caos parlamentario que causaba estragos en la Cuarta. La fragmentación política produjo en los años 50 y 60 gobiernos vacilantes incapaces de enfrentarse efectivamente a las grandes cuestiones (como Argelia) o incluso de menor entidad. Tras algunos ajustes, la Quinta República pivotaba sobre un jefe ejecutivo fuerte que era elegido para un mandato de siete años y que nombraba a un primer ministro encargado de ejecutar sus políticas (y de servir como cabeza de turco llegado el caso). El Parlamento había de ser un servidor del presidente, porque se esperaba que los ciudadanos votarían una mayoría presidencial (para un mandato de cinco años). Pero en los años 80 y 90, elecciones con resultados sorprendentes y el descontento político alteraron el panorama. Presidentes de un color se encontraron «cohabitando» en el poder con mayorías parlamentarias de la oposición, viéndose obligados de esta guisa a nombrar enemigos suyos como primeros ministros. Ahora el poder de estos últimos iba en aumento, mientras que el del presidente se desdibujaba. No obstante, el sistema era suficientemente flexible para asimilar los inconvenientes políticos derivados de una situación así.

Según la encuesta del CEVIPOF, el 3 por ciento de los franceses se sitúan en los extremos de derecha e izquierda, el 24 por ciento se consideran de izquierda, el 15 por ciento de centro, el 17 por ciento de derecha y el 37 por ciento dicen no ser ni de derechas ni de izquierdas. ¿Qué pasaría si de nuevo en 2007 la fragmentación de la primera vuelta diese lugar a una segunda vuelta en la que volvieran a enfrentarse dos candidatos de derechas o bien un candidato socialista y uno de extrema derecha (al que le podría ir extraordinariamente bien en ausencia de opción de la derecha moderada)? El reparto será algo distinto al de 2002, salvo en el caso de Le Pen, que vuelve como una pesadilla. Le Pen aparece relativamente bien situado como candidato presidencial –en torno al 20 por ciento según algunas encuestas– explotando el miedo, como siempre ha hecho, pero ahora reforzado por los disturbios del otoño de 2005 en las *banlieus*, las tensiones derivadas de las manifestaciones contra el CPE en las ciudades y el temor a un eventual solapamiento futuro de estos descontentos. Al mismo tiempo, una mezcla de trotskistas, comunistas y antiglobalización obtiene asimismo resultados prometedores en los sondeos electorales. Se apoyan en el malestar de la izquierda respecto del Partido Socialista.

¿Necesita Francia una «Sexta República»? Se habla bastante de ello. Se hablaría aún más si no se hubiese reducido el mandato presidencial de siete a cinco años, de manera que al torpón de Chirac le queda sólo uno en el cargo y no tres. El socialista Laurent Fabius, ex primer ministro, ha descrito Francia como «una monarquía republicana que se ha quedado sin aliento». Desde luego Chirac no podrá insuflar aire fresco, y de hecho ningún aire en absoluto, en las velas de un país que se muestra inseguro acerca de su papel en el mundo,

e incluso en Europa, y cuyos ciudadanos están preocupados por la buena marcha de su vida social, económica y cultural.

En marzo de 2006, cuando los manifestantes contra el CPE inundaban las calles de París, el presidente de Francia abandonó precipitadamente una reunión sobre asuntos económicos en Bruselas para mostrar su malestar porque un destacado empresario francés se había dirigido al auditorio en inglés. El pique de Chirac simboliza bien el declive de su presidencia. Había sido presidente durante once años, el paro seguía siendo una cuestión candente, pero para él el problema es la hegemonía lingüística angloamericana. Sólo un detalle: cuando Villepin se convirtió en primer ministro, su sustituto como ministro de Asuntos Exteriores fue Philippe Douste-Blazy, que no habla otra lengua aparte del francés. Y es ministro de Exteriores, no de Interior.

Consideremos los principales acontecimientos del pasado año:

En mayo de 2005 salió «no» en el referéndum sobre la Constitución Europea. Los votantes debilitaron así en grado sumo lo que Chirac había esperado que fuese el principal medio para proyectar internacionalmente a Francia en los años posteriores. Aspiraba a un continente fuerte bajo liderazgo francés –haciendo tándem con Berlín– que competiría con Estados Unidos en un mundo «multipolar». Subsiguientemente, y no mucho después del rechazo a la Constitución, las elecciones alemanas llevaron al poder a una nueva canciller, Angela Merkel, decidida a reconstruir los vínculos con Washington, debilitados por la oposición alemana y francesa a la guerra de Irak. La estrategia de Chirac quedó hecha trizas.

La pasión del gaullismo fue siempre nacionalista: la reafirmación de la *grandeur* de Francia y de su status de potencia global tras la ignominia de la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, de Argelia. Su premisa, un Estado fuerte tanto en asuntos exteriores como domésticos, es una antigua tradición gala. El problema de De Gaulle, como observó Henry Kissinger, era cómo gobernar un país «arruinado por una generación de conflicto y décadas de humillación». De Gaulle «consideraba las políticas no tanto en función de criterios pragmáticos como de si contribuían o no a la restauración del prestigio de Francia». Y así su mandato se caracterizó por las afirmaciones simbólicas. Francia era parte de Occidente, desde luego, pero sería independiente de la alianza occidental dirigida por América y promovería el tercermundismo. Francia sería europea, pero eso significaba una «*Europe des patries*», pues De Gaulle no quería una Europa supranacional que hiciese sombra al Hexágono. Aceleró la reconciliación con Alemania Occidental a la vez que limitaba la proyección de Gran Bretaña en el continente debido al atlantismo de Londres.

En realidad el centro-derecha francés es plural y ha aumentado el ascendiente de los republicanos favorables al mercado, en detrimento del gaullismo más estatista. Dado que los herederos de De Gaulle, como el propio general, no han situado nunca su principal interés en la economía, unos pueden defender que el Estado tenga un papel potente en la economía y otros todo lo contrario. El gaullismo no gobernó durante buena parte del periodo más notable de la recuperación francesa posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero el *estatismo* le es congénito. Consiste en una combinación de iniciativas estatales dinámicas y política industrial activa, un vigoroso sector público y planificación indicativa. Ahora bien, la economía mundial funcionaba de manera diferente a finales de los años 40 y en los 50 que en la actualidad y los partidarios de una economía más liberal en las filas del centro-derecha francés han ganado influencia.

La presidencia socialista de Mitterrand buscó un nuevo enfoque de las relaciones franco-americanas. Se hicieron más confortables. Con frecuencia Mitterrand se lanzaba a iniciativas para reequilibrar la situación, en las que él tiraba hacia Washington mientras que sus diversos ministros de Exteriores apuntaban hacia otros sitios. Con el fin de la guerra fría, la disolución de la URSS y el declive del Partido Comunista Francés (al que Mitterrand despreciaba a la vez que se aliaba con él), además de la reunificación de Alemania, aparecieron nuevas y más fluidas realidades. El hecho de que quedase una única superpotencia en pie se convirtió en una nueva realidad global altamente significativa. El neogaullismo de Chirac trató de lograr un nuevo enfoque en respuesta al «unipolarismo» americano.

Si la política de Mitterrand fomentaba muchas veces un multilateralismo democrático (en la Guerra del Golfo, por ejemplo) en vez de una fútil competición con Washington, por su parte Chirac aspiraba a un mundo «multipolar» en el que Europa «haría de contrapeso» a Estados Unidos. Su multilateralismo es «neo»-gaullista porque Francia ya no es el estado de De Gaulle, especialmente porque estamos en una época de globalización. Por consiguiente, un proyecto gaullista no puede ser lo que fue otrora. Haciendo a París líder de Europa y especialmente influyente en el Tercer Mundo, Chirac podría proyectar la *grandeur* en una época de *post-grandeur*, compensando así las debilidades del estado francés contemporáneo. Daba por sentado que lo que era bueno para Francia era bueno para Europa y que eso se materializaría en una política exterior europea común, entre otras cosas.

Pero el mundo se ve diferente desde, digamos, Varsovia que desde París. Un primer ministro polaco, de cualquier tendencia, por entusiasta que sea de la Unión Europea, mirará siempre con recelo a un gran vecino situado al este. París puede querer hacer de contrapeso a Estados Unidos, pero Varsovia ve en Estados Unidos un contrapeso potencial ante una Rusia que se reafirma. Las buenas relaciones franco-rusas son obviamente de interés para París y eran un componente de la afirmación gaullista de independencia (también formaban parte de la diplomacia de Francia como «gran potencia» en siglos anteriores). Pero los ciudadanos de Europa central y oriental, ya enterrada la guerra fría, bien pueden recelar que algunos de sus intereses se vean sacrificados a esas relaciones (la memoria de la *Ostpolitik* de Alemania Occidental suscita idénticos temores). Villepin, cuando aún era ministro de Asuntos Exteriores, afirmaba que «el lugar de Francia está a la cabeza de Europa» y que Europa podía ser un «polo» en un mundo multipolar en asociación con Rusia.

Las aspiraciones neogaullistas de Chirac y Villepin quedaron pronto diluidas con la ampliación de la Unión Europea. Su dramática amenaza de vetar el apoyo de la ONU a la guerra de Irak —un gesto que no hizo nada por parar la guerra— puede haber reducido el predicamento de Francia en la UE. Los ciudadanos de la Unión que formaron parte del antiguo bloque soviético recuerdan a Estados Unidos como la principal esperanza durante los años de la guerra fría y se sienten incómodos ante la eventualidad de una política exterior europea común bajo la batuta de Francia. Tales preocupaciones no pueden sino agudizarse cuando los enemigos franceses del proyecto de Constitución Europea se dedican a alarmar a la población diciendo que los «fontaneros polacos» inundarán el país, se quedarán con los puestos de trabajo y harán que bajen los salarios. Si tales proclamas irritaron a los polacos, no hay duda, por otro lado, de que reflejan los temores reales de los franceses, que piensan que su Estado de Bienestar peligra ante la progresión de un orden económico más liberal. Estos temores explican una parte del respaldo de que gozaron las movilizaciones contra el CPE.

En otoño [de 2005] hubo otro «no»: la violencia se extiende por los suburbios franceses. Duró tres semanas y causó enormes destrucciones. El estallido de violencia pareció desmentir la afirmación, formulada con reiteración y mucha seguridad después de las bombas del verano de 2005 en Londres, según la cual el «modelo republicano» francés ha tenido mucho más éxito en la integración nacional que el «multiculturalismo blando» del Reino Unido. Pero ahora el «no» era un clamor entre los jóvenes de las *banlieus* que rodean París y otras grandes ciudades de Francia con una significativa población inmigrada procedente del norte de África marcada por la pobreza, la confinación en guetos y una fuerte incidencia del paro. Villepin, defensor del CPE como respuesta, había sido también un enemigo ideológico de los programas de discriminación positiva (o acción compensatoria). En una república, insistía, los ciudadanos tienen todos el mismo status. Su rival Nicolas Sarkozy, un político con inequívocas ambiciones presidenciales, había sido de alguna manera un inconformista en el seno de las derechas en lo relativo a esta cuestión, pues había apoyado la discriminación positiva. Pero es visto con enorme recelo por los ciudadanos de origen norteafricano por su tendencia a condescender con los prejuicios más extendidos. Por ejemplo, Sarkozy declaró recientemente: «Si hay gente a la que no le gusta Francia, que se vaya». Algunos, muchos en realidad, perciben en estas palabras un eco del eslogan de Le Pen, que aparece habitualmente sobre un mapa de Francia en carteles exhibidos en los mítines del Frente Nacional: «Ámala o déjala». Sarkozy preferiría que la campaña presidencial girara en torno a la relación entre la inmigración y los disturbios de las *banlieus* y no en torno a la legislación laboral. Esto le permitiría manifestarse como un nacionalista y populista, compitiendo por los votantes de Le Pen, sin dejar de alentar las reformas económicas de carácter neoliberal. Reiteradamente ha hablado de la necesidad de una «ruptura» con el pasado, y ratificó su apoyo al CPE, pero luego se distanció de él a medida que las manifestaciones eran más masivas. Es la única figura destacada del centro-derecha que ha salido reforzada de la debacle del CPE. Poco después presentó un proyecto encaminado a hacer más selectiva la política de inmigración (poniendo el acento en la calificación profesional de los inmigrantes y no en la reunificación familiar).

Hay mucho debate acerca de si el «no» de las *banlieus* puede considerarse o no parte de un «choque de civilizaciones» interno. ¿Se ha debido sobre todo a agravios de índole socioeconómica? ¿O a la cultura política y al resentimiento de las minorías musulmanas, que son la segunda confesión religiosa del país, hacia una elite laica que se aparta de la acción compensatoria mientras que la sociedad, por secularizada que esté, sigue manteniendo un cierto aroma católico? Sólo meses después de que el *foulard* (el pañuelo musulmán) fuese prohibido en las escuelas en nombre del laicismo, el ministro del Interior (en ese momento Dominique de Villepin) ordenó que las banderas ondearan a media asta en las escuelas y otros edificios públicos en señal de duelo por la muerte de Juan Pablo II. La mayoría de los musulmanes franceses, seculares o religiosos, no simpatizan con el intimidatorio fundamentalismo islámico que mantiene una bien organizada y tiránica presencia en muchas *banlieus* (y que fue una de las causas que dio lugar a la ley sobre el *foulard*). Pero debieron acoger con disgusto esta muestra de incoherencia del gobierno.

Cuando los analistas abordan los problemas de los suburbios muchas veces tienen dificultades para distinguir las cuestiones políticas de las culturales y los prejuicios de los problemas socioeconómicos. Los medios de comunicación presentaron una imagen según

la cual todos los detenidos por los disturbios eran de origen norteafricano, pero estudios recientes complican un tanto el panorama. Así, un estudio sobre Yvelines, un suburbio cercano a París, mostró que el 33 por ciento de los controlados por la autoridad eran «europeos» de origen, un 35,5 por ciento norteafricanos y un 28,9 por ciento africanos. El 23 por ciento eran estudiantes de instituto, el 13 por ciento escolares y el 6,6 por ciento estudiantes universitarios. El 24 por ciento eran jóvenes en paro (*Le Figaro*, 19 de mayo 2006). Esta última cifra puede parecer elevada, pero es mucho menor que las tasas de paro que suelen darse en las *banlieus*.

¿Un «no» a la libertad de expresión? La controversia sobre las viñetas se desencadenó tan a continuación del conflicto en los suburbios que muchos ciudadanos volvieron a preocuparse, esta vez acerca de los valores republicanos, las leyes y las garantías constitucionales de una sociedad abierta. Décadas atrás un presidente francés, Charles de Gaulle se negó a encarcelar al filósofo Jean-Paul Sartre por su política radical de oposición diciendo que «no se mete a Voltaire en la cárcel». Pero Voltaire habría sido arrestado por muchos de los manifestantes, en su mayoría musulmanes, que bajaron a las calles en Europa y otras partes del mundo para denunciar, a menudo con violencia, las viñetas políticas que representaban al profeta Mahoma. Fueron publicadas, como se sabe, en un periódico danés de derechas y reproducidas en Francia y otros lugares.

En estas protestas parecía plantearse algo así como una demanda de extraterritorialidad, como si fuesen los musulmanes ultrajados del mundo entero y no, digamos, la ciudadanía francesa, los llamados a decidir lo que significa la libertad de expresión dentro de las fronteras del país. En este sentido la controversia de las viñetas suscita la cuestión política más candente de la globalización y también de la europeización: ¿qué es una república democrática en esta época? Si se piensa que «el mercado» es el orden «natural» de las cosas y que sus «demandas globales» —o en su caso las demandas paneuropeas— deberían prevalecer sobre las prioridades sociales establecidas por los ciudadanos de una colectividad política autogobernada, ¿por qué razón no deberían ser suplantadas también las normas de esa colectividad por las demandas globales de movimientos religiosos para los que tienen prioridad absoluta las «leyes dadas por Dios»? En ambos casos se supone que ha de prevalecer el fundamentalismo (económico o religioso), dejando a un lado lo que serían preocupaciones no naturales, en un caso, o impías, en el otro.

Otra gran manifestación tuvo lugar casi en coincidencia con la controversia de las viñetas. Protestaba por el asesinato de un judío parisino de veintitrés años a manos de una banda de suburbio. En la habitación donde Ilan Halimi fue torturado durante tres semanas se hallaron panfletos islamistas y literatura de una organización benéfica pro-Hamás. Los secuestradores, que se llamaban a sí mismos «Los bárbaros», estaban dirigidos por un ciudadano francés nacido en Costa de Marfil de nombre Youssef Fofana. Estaban convencidos de que todos los judíos eran ricos y por tanto podían ser extorsionados. Su víctima era un vendedor de teléfonos móviles. Según *Le Monde* el episodio constituía «el espejo perfecto del estado real de nuestra sociedad». Entre quienes marcharon en memoria de Halimi estuvieron Sarkozy, el líder socialista François Hollande, y un amplio espectro de grupos políticos y sociales, entre los que se contaba el CRAN (Consejo Representativo de Asociaciones Negras). *Libération* observó que «odiar a los judíos ha abandonado la categoría de lo inaceptable para convertirse en algo normal, especialmente a los ojos de mucha gente joven».

Un sondeo de opinión mostró en febrero que el 57 por ciento de los franceses pensaban que el antisemitismo iba en aumento en su sociedad. En realidad los ataques antisemitas fueron en 2005 la mitad que los del año anterior, debido en parte a vigoroso esfuerzos por parte del gobierno. Ni Chirac ni Villepin se perdieron el funeral por Halimi. El antisemitismo es un asunto serio en Francia, pero evidentemente no habría que exagerarlo. Sin embargo, se oye un poco demasiado que las «provocativas» acciones israelíes en el Mediterráneo incitan el antisemitismo. Y francamente se podría decir que la muy unilateral política del gobierno francés en Oriente Medio, que es un ingrediente de su búsqueda de influencia en el Tercer Mundo, se combina fácilmente con el tono de juicio sumarísimo de algunos intelectuales cuando tratan del conflicto Israel-Palestina (Israel se sienta siempre en el banquillo de los acusados). Esta combinación ayuda a crear un ambiente que permite a los tipos viscerales, autóctonos o inmigrados, imaginar que tienen vía libre para actuar contra los «sionistas». Hace pocos años *Le Monde* publicó un chiste. Representaba a un judío ortodoxo, en caricatura vulgar, que llevaba adosados «asentamientos». Al lado había un árabe, también en caricatura vulgar, que tenía adosadas unas bombas. La leyenda decía: «Dos kamikazes», como si la usurpación de tierras por parte de nacionalistas religiosos, por reprehensible que sea, fuese equivalente a matar niños en una pizzería. No hubo manifestaciones violentas de judíos o de musulmanes en protesta por estas viñetas ni en Francia ni en otra lugar.

El «no» al CPE durante el invierno y la primavera de 2006, con todos estos antecedentes, acaba cristalizando en una crisis nacional. El Consejo Constitucional dictaminó que la ley se ajustaba a derecho y el presidente se dirigió al país. Declaró a través de la televisión, en su habitual tono solemne, que «ha llegado el momento de desbloquear la situación actuando de manera lógica y razonable». ¿Cómo desbloquear la situación? Poniendo la ley en vigor, explicó, pero no aplicándola, porque sería cambiada. Esto dejó de una pieza a muchos de sus veintidós millones de espectadores. El Jefe del Estado rubricaba por principio una ley a la que se oponían dos tercios de los ciudadanos y luego proponía no hacer caso de ella. Chirac podría haber propuesto también el *foi gras light* como remedio para los problemas de colesterol. Un parlamentario socialista dijo que era «abracadabrante».

Lo que se dice y lo que no se dice

Muchos comentaristas, especialmente en Estados Unidos, han explicado el conflicto en torno al CPE conforme a una narrativa neoliberal que dice más o menos lo siguiente: el mundo ha cambiado y Francia se niega a «ajustarse». Los franceses están «mimados» por el Estado. La protección social es «demasiado generosa». La legislación laboral es demasiado «rígida». Eso desanima la inversión extranjera. Los sindicatos están siempre haciendo huelgas. El crecimiento queda inhibido. No es de extrañar que haya un problema de paro de larga duración. (Un diez por ciento de la población está en paro, incluyendo una cuarta parte de los jóvenes, con cifras que llegan al 50 por ciento en las *banlieus* más deprimidas.) Una encuesta indicaba en marzo de 2006 que sólo el 36 por ciento de los franceses piensan que «el libre mercado» es el mejor sistema económico, en contraste con el 71 por ciento de los americanos, el 66 por ciento de los británicos y el 65 por ciento de los alemanes. ¡Imagínese!

¿Qué se puede hacer? Las «soluciones» nos suenan muy familiares: recortar el Estado de Bienestar y «flexibilizar» el mercado de trabajo. El CPE, una reforma modesta, responde a los disturbios del pasado otoño protagonizados por jóvenes en mala situación económica.

Se habrían beneficiado mucho con la simplificación de las normas para el primer empleo, mientras que los estudiantes que se manifestaban, que paralizaron ochenta y cuatro universidades y unos quinientos liceos, provocando daños en algunos casos, son unos críos privilegiados deseosos de una vida sin riesgos. No proceden precisamente de los barrios degradados y además están llamados a conseguir los mejores empleos gracias precisamente al sistema de enseñanza que paralizaron. En cuando a los sindicalistas, se trata de izquierdistas desfasados cuyas huelgas interrumpen regularmente el discurrir normal de la vida económica en nombre de ideas fracasadas.

Pero hay algunas cosas que no se dicen en este apretado resumen. La Bolsa de París alcanzó en marzo de 2006 un máximo en relación a los últimos cinco años. Las cuarenta primeras empresas de Francia registraron beneficios récord en los primeros meses de 2006, superiores hasta en un 50 por ciento a los de 2004 (*The Economist*, 1 de abril 2006). Francia es el quinto país más rico del mundo y de alguna manera se las ha arreglado bien para conseguir este puesto manteniendo la protección social. La inversión directa extranjera alcanza el 42 por ciento del PIB, seis puntos porcentuales por encima de la Gran Bretaña de Tony Blair. En realidad el país pierde pocos días por huelgas y los trabajadores franceses son más productivos por hora que sus homólogos americanos y británicos. (La cosa parece distinta en algunas estadísticas debido a la semana laboral de treinta y cinco horas vigente en Francia.) En este contexto el gobierno francés presentó un proyecto de sabor orwelliano: la mejor manera de luchar contra el desempleo es haciendo más fácil desempear a la gente. «Todos sabemos que el trabajo se ha hecho más precario», observó Michel Rocard, antiguo primer ministro socialista, cuando me encontré con él a final de mayo de 2006 para discutir la situación. «Y es verdad que Francia tiene un Estado muy centralizado y ordenancista, pero esto significa que su respuesta simbólica a los problemas es especialmente importante. El CPE, al convertir la precariedad en ley, destruía el símbolo de un Estado que está ahí para servirnos y protegernos».

No es evidente que el CPE tuviese el efecto pretendido. Los críticos indican que cerca del 60 por ciento de los jóvenes franceses de menos de veintiséis años ya trabajan con contratos temporales. La ley, dicen, sólo habría agrandado aún más la puerta del empleo temporal en nombre de la «flexibilidad». Además, si la productividad del trabajo es alta en Francia, ¿por qué restar seguridad a la gente? ¿No desalentaría eso el gasto en consumo de unos trabajadores preocupados por su futuro, con el efecto consiguiente de menor crecimiento y más desempleo? Por supuesto, de eso se sigue también que cuanto más seguros estén los trabajadores más productivos serán, y que el bienestar económico de una sociedad puede conseguirse a través de la justicia social y la cooperación más que abriendo todos los ámbitos de la vida a la acción del mercado. En cuanto a los estudiantes, si bien nada justifica la violencia o el vandalismo, ¿por qué no habrían de desear un futuro más seguro?

Laurence Parisot, que es la voz más destacada de la patronal francesa y presidenta de su principal asociación, MEDEF (Mouvement des Entreprises de France), reveló lo que estaba en juego en último término. Criticó al CPE por aplicarse sólo a los jóvenes trabajadores. Como desde su punto de vista todas las edades deberían tener la misma inseguridad, rechazaba de esta manera tan reveladora una crítica de izquierda al CPE (que habría promovido la rivalidad intergeneracional en vez de un sentido de ciudadanía social común). Lo que quiere la patronal es una completa remodelación del contrato de trabajo tipo, y más cosas.

El CPE no era una propuesta aislada o simplemente la respuesta al estallido social de los suburbios. Una norma similar, el CNE (*Contrat nouvelle embauche*, o Contrato de Nuevo Empleo) fue aprobada ya el verano pasado para el caso de las pequeñas empresas, entendiéndose por éstas las de menos de veinte empleados. Primero el CNE, luego el CPE, ¿qué vendrá después, preguntan los críticos, sino la reversión general de los derechos de los trabajadores y de la protección de los trabajadores de más edad, todo en nombre de la «flexibilidad»? Entonces se les dirá a los trabajadores que les irá mejor si «el país» se hace «más competitivo» por medio de la reducción de los salarios, la externalización de puestos de trabajo y la disminución de las prestaciones de la seguridad social.

Siendo tan persistente el desempleo, ¿por qué razón deberían aceptar los franceses leyes que hacen más fácil enviarles al paro, a ellos y a sus hijos, especialmente si los campeones de un mercado de trabajo «liberalizado» –o sea, de un mercado de trabajo más rentable para una parte de la población y más precario para la otra– querrían asimismo recortar el Estado del Bienestar y las prestaciones sociales? Estas son cosas que resultan bastante útiles si uno se encuentra en paro. Un día «ellos» podrían decir que, en fin, reducir vuestros ya bajos salarios es simplemente un lamentable daño colateral del funcionamiento natural de los mercados globalizados. «Ellos» apuntan los privilegios de los estudiantes que se manifiestan, «mimados» en comparación con los jóvenes de los suburbios. Pero cabría esperar que los líderes republicanos, que tanto hablan de patriotismo, elogiasen alguna vez a los jóvenes por defender causas y necesidades que van más allá de las propias. (En cualquier caso, las universidades pasan apuros financieros y están masificadas).

¿Globalización a la carta?

Es, sí, más difícil despedir a un trabajador con contrato indefinido en Francia que en Estados Unidos, pongamos por caso. Un trabajador francés puede recurrir a los tribunales. Aunque la patronal se queja de que esto lleva a largos y costosos procesos que favorecen a los trabajadores, sólo una cuarta de quienes pierden su empleo recurren a esta vía. Los procesos suelen durar unos dos años y medio y dos tercios de ellos se resuelven de manera favorable al trabajador. Fijémonos: los tribunales benefician a dos tercios de un cuarto de los trabajadores despedidos, y de esto se dice que es «inflexible». La estadística es del MEDEF. Tal vez yo tenga actitudes de izquierda antigua –no tan antigua, empero, como esa idea del siglo XVIII de un capitalismo sin regulaciones– pero no se me alcanza por qué eso es malo. Un estado democrático debe aportar contrapesos al poder jerarquizado en el lugar de trabajo, especialmente en una sociedad con un movimiento obrero relativamente débil. Sólo el 8 por ciento de los trabajadores franceses están sindicados (mucho más en el sector público, razón por la cual las huelgas tienen a veces un impacto desproporcionado). El trabajo organizado se reparte entre cinco confederaciones sindicales. La tasa de afiliación ha estado en declive desde la década de 1970.

Entretanto la economía francesa ha prosperado con el sistema contractual existente. Las firmas de telecomunicaciones, la industria de cosméticos y el sector bancario son boyantes. Leonardo Sforza, jefe de investigación y asuntos de la UE en Hewitt Management Consultants declaró al *International Herald Tribune* que las compañías acaban dando con procedimientos adecuados resolver sus necesidades dentro de la normativa vigente, si bien poniendo en práctica «un enfoque más sofisticado de la gestión de personal» que en la

mayoría de otros países. Estas opiniones son compartidas incluso por McDonald's, ese infame «hiperpoder» americano. McDonald's da empleo a unos treinta y cinco mil jóvenes franceses, con una edad media de veintidós años, y abrirá treinta establecimientos más este año. Su vicepresidente de recursos humanos, Hubert Mongon, afirma que McDonald's ha utilizado el «viejo» sistema «con éxito durante 25 años y esperamos que siga siendo un éxito durante los próximos 25 años». (*International Herald Tribune*, 24 de marzo 2006).

Un crítico podría añadir que Chirac y Villepin se vuelven muy poco liberales —ellos dirían que despliegan un enfoque «patriótico»— cuando se trata de mantener el control francés sobre las empresas francesas y de promover el control francés sobre las empresas extranjeras. Es un poco como la política exterior neogaullista: uno se presenta ante el mundo como un héroe moral (por ejemplo, en el debate sobre Irak en el Consejo de Seguridad) a la vez que persigue sus propios intereses nacionales (un «mundo multipolar» en el que dirigirá uno de los polos). Patrick Sabatier, subdirector de *Libération*, llama a esta política «globalización a la carta». Francia no ha sido «inflexible» ni se ha desentendido de un mundo en proceso de globalización. Hubo 190 fusiones y compras de empresas por grupos franceses el año pasado, con un aumento del 157 por ciento. El gobierno ayudó a evitar la compra por Pepsico (una empresa americana) de Danone (una empresa francesa) y, de manera similar, en febrero de 2006 trataba de impedir la adquisición de Suez, una firma privada francesa, por una sociedad italiana. El gobierno no puso reparos cuando el BNP Paribas (un banco francés) se hizo con un banco italiano o cuando Cosméticos L'Oréal adquirió una cadena británica («Body Works»). Francia no es el único país que hace este tipo de política. Pero se beneficia de la globalización a la vez que, en palabras de Sabatier, «resiste a los esfuerzos de otros por hacer lo mismo con las empresas francesas, siguiendo el principio de que “Lo que es mío es mío, y lo que es tuyo, eso hay que negociarlo”» (*International Herald Tribune*, 19 de mayo 2006).

Ahora bien, lo que es de Francia y de las empresas francesas es de Francia y sus empresas, pero los derechos sociales de los ciudadanos franceses, eso hay que negociarlo. Después de la retirada del CPE el primer ministro advirtió a los ciudadanos que la sociedad entraría en declive si no aceptaba más riesgos en la vida. No se trataba de riesgos demasiado preocupantes, matizó. Con ayuda de su gobierno sería un «riesgo totalmente controlado». Considerando lo sucedido el año pasado es fácil entender por qué muchos ciudadanos franceses se abstendrían de darle el beneficio de la duda a su clase política para gestionar algo que se llame un «riesgo totalmente controlado». Sería como si los americanos le diesen a Donald Rumsfeld el beneficio de la duda para dirigir la guerra en Irak.

El gobierno francés tenía otras alternativas. Por ejemplo, podía haber promovido la negociación colectiva. Podía haber ofrecido propuestas para liberalizar el mercado de trabajo con concesiones compensatorias por parte de la patronal, si Villepin hubiese querido convencer a los críticos (los nunca consultados sindicatos) de que la agenda no era unilateral, que el CPE no era parte de un programa en marcha para revertir los derechos de los trabajadores y acabar con la ciudadanía social. En lugar de eso, el gobierno optó por legislar. Era una opción política contra la concertación social y fue esta opción, más que el CPE como tal, la cuestión decisiva. Como consecuencia de ello, Villepin consiguió que los dirigentes sindicales, históricamente divididos en Francia, se uniesen contra él, incluidos los líderes de las dos mayores confederaciones sindicales, Bernard Thibault de la procomunista CGT y François Chérèque de la CFDT, cuya fuerte enemistad es bien conocida. Los seguidores del

gobierno acusaron a los dirigentes sindicales de «conservadores», es decir, de estar cerrados al cambio. Sin embargo, Thibault ha mostrado una clara disposición a adoptar posiciones que son impopulares en la izquierda, incluyendo a su propio y siempre patético Partido Comunista, como por ejemplo apoyar la Constitución Europea. Chérèque declaró que «es necesario ayudar a los jóvenes a acceder a un puesto de trabajo, pero con contratos que respeten los derechos básicos de los trabajadores». Apoyaba lo que «en otros países se llama la “flexi-seguridad”, es decir, sólidas garantías para los asalariados en un mercado de trabajo más dinámico» (*Le Monde*, 7 de abril 2005).

Agitaciones

¿Y el mundo intelectual? «Ahora tenemos menos profetas intelectuales, que de todas formas es una categoría peligrosa», señala Rocard. «Son útiles para la ética de la sociedad, pero no cuando lo que se necesita son ideas pragmáticas para el cambio social». Los franceses tienen necesidad de ideas que traten de sus vidas, y no es eso lo que suministran las corrientes intelectuales francesas más conocidas en Estados Unidos. Los postmodernos, cuya reputación en Francia es mucho más modesta que al otro lado del Atlántico, tienen poco que decir sobre la crisis del país. Los «nuevos filósofos» de los años 70, como Bernard-Henry Lévy, son tan mediáticos como siempre pero se buscará en vano alguna novedad sustancial en sus reprobaciones –no todas equivocadas pero ahora ya bastante tediosas– de las flaquezas de la izquierda. Muchos de ellos se identificaron en el pasado con alguna variante del leninismo y se transformaron en «antitotalitarios» sin siquiera cambiar de tono, como si fueron los primeros en darse cuenta de que había algo que no estaba claro en Stalin o Mao. Hablan mucho de Tony Blair, justo cuando Gran Bretaña se prepara para dejarlo atrás. El *décalage* es un curioso fenómeno de la historia intelectual francesa.

Pero algo se mueve. En mayo se reunió en Grenoble un «taller intelectual» integrado por académicos e intelectuales, en su mayoría entre treinta y cuarenta años, para promover un debate público basado en «La nueva crítica social». Junto a los participantes oficiales, unas ocho mil personas acudieron a los actos, que duraron varios días, y que fueron iniciativa de la «República de las Ideas», una red intelectual animada por Pierre Rosanvallon, y por la «Asociación de activismo solidario». En las mesas redondas se debatieron muchos temas: ¿hasta qué punto las múltiples crisis francesas son reflejo de problemas más generales de las democracias occidentales o son un fenómeno específicamente francés? ¿Cuáles son los nuevos perfiles de la sociedad francesa, derivados de tensiones y diferencias sociales que ya no son estrictamente de clase? ¿Hasta qué punto el malestar actual del país tiene que ver con la crisis del sistema educativo o con el acceso desigual a la cultura? ¿Cómo puede establecerse un nuevo diálogo –con efectos prácticos– en el que se comprometa una generación formada con posterioridad a sacudidas como Argelia y el 68, y ya no en ellas? Los debates que antaño agitaron a la izquierda estuvieron ausentes en estos encuentros, al menos hasta donde se me alcanza. Nadie discutió acerca de quién era un izquierdista auténtico y quién un socialdemócrata traidor. *Le Monde* dedicó seis páginas a estos encuentros. La portada de *Le Nouvel Observateur* hablaba de los jóvenes «*intellos*» que «quieren cambiar la izquierda». El artículo de páginas interiores era un tanto superficial, pero en todo caso expresaba muy bien el deseo de nuevo pensamiento en el panorama un tanto apagado de la Francia actual.

El Partido Socialista no ofrece demasiadas ideas innovadoras. Pero su candidata a la presidencia, Ségolène Royal, representaría algo nuevo y positivo si ganase. Ha habido mujeres primera ministra y ministra de Defensa, pero nunca presidentas. Si bien Royal ha sido criticada por su inexperiencia y ha sido objeto de invectivas sexistas por parte de rivales de su propio partido («los elefantes» de la vieja guardia), es una política experta, miembro de la Asamblea Nacional, ex ministra y responsable de la región occidental de Poitou-Charentes. Su compañero François Hollande es secretario del PS. ¿Qué ideas marcan su pensamiento político? Es difícil decirlo, pese a algunos cumplidos que haya podido hacer a Blair y a sus declaraciones relativas a los nuevos estallidos de violencia en los suburbios en mayo de 2006.

Tener candidato no es lo mismo que tener proyecto. Como tanto otros partidos de izquierda, el PS francés no ha conseguido ubicarse en el mundo de la globalización. «El PS es el único partido socialista de la Unión Europea que no ha acabado de asumir la economía de mercado», dice Rocard. «Todos los demás buscan vías para contrapesar al mercado», añade, «pero la corriente principal del socialismo francés piensa todavía en una economía administrada». Rocard advirtió recientemente a sus compañeros que no debían imitar a Jules Guesde, un dirigente socialista anterior a la Primera Guerra Mundial cuyo dogmatismo en el terreno de las ideas y del programa entró a menudo en conflicto con el espíritu más ágil de Jean Jaurès, el mayor líder socialista. Simplificando, en el seno del PS hay dos líneas, una que se decanta más por un Estado activista y otra por un «socialismo de mercado». La primera, dominante de largo, subraya el papel del Estado democrático en la promoción de la igualdad. La segunda pone énfasis en la autogestión desde abajo. El blairismo también ha hecho su aparición.

El Estado y la Socialdemocracia

A mediados de mayo de 2006 estalló el caso «Clearstream», un oscuro escándalo que resume todas las desdichas del gobierno. Villepin fue acusado de tratar de implicar (a instancias de Chirac) a Sarkozy, su rival, en una trama de corrupción de la que participaba una entidad financiera que da nombre al caso. Hollande declaró que «la derecha ha tomado al Estado como rehén». La observación es reveladora de la dificultad real de la izquierda como, por su parte, pone de manifiesto la de la derecha la expresión «riesgo totalmente controlado». El problema para los socialistas franceses no es cómo liberar al Estado; es cómo reinventarlo y también cómo replantear su relación con la sociedad civil y con los mercados, tanto exteriores como interior. Una mirada retrospectiva a la época en que los socialistas franceses utilizaron por vez primera el Estado de manera creativa para transformar el país puede servirnos para entender su bloqueo actual.

El gobierno del Frente Popular en 1936 fue para los franceses «los 100 días que cambiaron nuestras vidas», como proclamaba una portada muy oportuna de *Le Nouvel Observateur* justo tras la retirada del CPE. Aquel gobierno estaba presidido por Léon Blum, que había reconstruido el socialismo francés después de que éste hubiese perdido tres cuartas partes de la militancia, que se había pasado al Partido Comunista en 1920. Blum pensaba que el compromiso democrático debía alentar la lucha socialista por una sociedad igualitaria. En un discurso ante un congreso socialista, en 1926, trazó las líneas en que había de moverse. Abordó una vieja cuestión de la izquierda (y no sólo de la francesa): ¿pueden los

socialistas, que se proponen transformar la sociedad, entrar en un gobierno sujeto al orden «burgués»? Él se oponía a la «participación en el poder», es decir, a compartir responsabilidades de gobierno sin más. Defendía, en cambio, el «ejercicio del poder», es decir, formar parte del gobierno si los socialistas podían lanzar grandes reformas que apuntasen a un horizonte social distinto. Distinguía estas dos opciones de la «conquista del poder», que era la consecución de un mandato popular abrumador para revolucionar la sociedad. El Frente Popular «ejerció» el poder después de la victoria electoral de una coalición de socialistas, radicales y comunistas (los últimos no entraron en el gobierno, prefirieron un apoyo externo sin responsabilizarse). Cuando Blum se convirtió en primer ministro estallaron huelgas en todo el país y pudo utilizar la presión que ejercían para arrancar concesiones: los obreros consiguieron un aumento del 12 por ciento, vacaciones pagadas por primera vez, la semana laboral de cuarenta horas, se estableció la negociación colectiva, y se extendió el control del Estado sobre la industria armamentista y sobre el Banco de Francia. Los llamados «Acuerdos de Matignon» encaminaron a Francia hacia un nuevo horizonte social, que posteriormente continuaría, después de la guerra, reformulado y modificado, durante décadas. Tal logro es, a la postre, la némesis del neoliberalismo, porque empezó a socializar la ciudadanía.

Algunos radicales, sobre todo comunistas o trotskistas, se mostraron desdeñosos con la posición de Blum. Leídos hoy parecen un poco como los neoliberales contemporáneos, que desprecian el Estado de Bienestar. Los puntos de partida son distintos, por supuesto. Aquéllos lamentaban que Blum no «hiciera la revolución», estos últimos lamentan que la ciudadanía social contravenga las verdades del mercado de la señora Thatcher. Blum insistía en que el Frente Popular tenía un mandato electoral para el cambio social, pero no había una vasta mayoría que exigiese una revolución. Un académico americano me aseguró una vez que Blum «traicionó a los obreros», porque se limitó a introducir reformas. Yo aduje que tal vez la utopía no fuera plausible en aquel momento pero que no estaba nada mal que los trabajadores disfrutaran de vacaciones pagadas por primera vez. Fue un intento de «comprar a los trabajadores», replicó. Y se enfadó bastante cuando dije que si teníamos esa conversación en un café de París era sólo porque ambos éramos profesores sin obligaciones docentes durante el verano.

En realidad Blum llevó la transformación social tan lejos como un demócrata podía en aquellas circunstancias. Adam Przeworsky subrayó en su estudio de 1986 *Capitalismo y Socialdemocracia* que la clase obrera de Marx, el proletariado industrial, no fue nunca más del 40 por ciento de las sociedades occidentales. Su condición de clase universal –la gran mayoría inevitable de la sociedad, encarnación de intereses trascendentes– es una condición atribuida. Jamás fue una realidad, aunque el apoyo a sus (diferenciados) intereses sí que impulsó a la sociedad occidental a alcanzar más igualitarismo social y más democracia. Falta de ideas más ágiles acerca de la historia, la estructura social y el cambio, la izquierda (o al menos una parte de ella) se vio condenada a abanderar lo que era una minoría social a la que imputaba aspiraciones universalistas y un programa a largo plazo que nunca se materializaría en un marco democrático. La alternativa no era otra que las alianzas y el compromiso socialdemócrata.

La expresión «social-demócrata» fue utilizada en sentido despectivo por primera vez por el propio Marx en escritos sobre las revoluciones francesas de 1848-1851. (Lenin la

convirtió en un epíteto insultante, sólo superado por Stalin cuando dijo que «objetivamente la socialdemocracia es el ala moderada del fascismo»). Marx criticaba a los «socialistas demócratas» de Louis Blanc por su alianza interclasista con los republicanos demócratas «pequeño-burgueses». Gracias a esta «social democracia», explicaba, «las reivindicaciones sociales del proletariado perdieron punta revolucionaria y adquirieron un tinte democrático mientras que las demandas democráticas de la pequeña burguesía fueron despojadas de su forma política y adquirió relieve su coloración socialista». Marx pensaba que la derrota que sufrieron justificaba su oposición a las alianzas reformistas. Pero lo cierto era lo contrario. Aunque aquellos fueran derrotados, lo que se ha demostrado deficiente (y más aún hoy en día) son las concepciones de Marx acerca de la clase y la emancipación. El igualitarismo social ha avanzado en las sociedades occidentales sólo gracias a las políticas de compromiso que él rechazaba; se ha debido a los esfuerzos de los socialdemócratas por socializar las repúblicas democráticas. La ejecutoria de Blum en 1936 es un ejemplo destacado. Cierto, no condujo —y jamás podría haberlo hecho— a «la conquista del poder». Pero la alternativa leninista sólo produjo catástrofes. Después de los años 60 algunos teóricos de la izquierda idealizaron los «nuevos movimientos sociales». Pero éstos se han demostrado relativamente limitados en cuanto a su impacto y alcance. La «izquierda anti-globalización» de hoy se apoya en ideas confusas que han sido objeto de expresión intelectual en obras como la de Michael Hardt y Antonio Negri *Imperio* o bien en un desfasado, pero posmodernizado, trotskismo vetado de tercermundismo. Sus activistas tienen tantas probabilidades de alcanzar sus objetivos como las que tenía Mijail Bakunin en 1870 cuando junto con algunos seguidores ascendió por la escalinata del ayuntamiento de Lyon y declaró abolido el Estado, sólo para ser desalojado poco después por la policía.

Sin embargo, el «ejercicio del poder» se basa en el Estado y el papel de éste —y por consiguiente el proyecto de socializar las repúblicas democráticas— se encuentra ahora cuestionado como consecuencia de la globalización. Por eso la crisis de Francia con los neogaulistas es también la crisis de la izquierda. Los socialistas franceses trataron de ir más allá del Estado de Bienestar tras su acceso al poder en 1981, pero el entorno económico internacional les forzó a tomar otra dirección. «La realidad exterior», dirán algunos. Pero la cuestión interesante sería saber si la «realidad interna», en Francia, o en cualquier otra parte, va a hacer obligados los esfuerzos liberalizadores, tan conflictivos por lo demás, del centro-derecha. Habría sido útil para los gobernantes de Francia y especialmente para los socialistas la lectura del documento «El nuevo modelo socialdemócrata sueco» publicado recientemente por Compass, un proyecto intelectual con base en Londres que trata de preparar al Partido Laborista británico para la era post-Blair. Su autor, Robert Taylor, llama la atención acerca de la manera como los socialdemócratas suecos se han enfrentado a la globalización. El modelo de Estado de Bienestar de Suecia fue en su tiempo el producto de una relación triangular entre un sector privado eficiente, un movimiento sindical vigoroso y un «Estado ilustrado» (dominado por los socialdemócratas). Entró en dificultades en la década de 1970, pero en las décadas siguientes los socialdemócratas promovieron una «modernización consensuada». Se adaptaron a un entorno en cambio y, de hecho, aceptaron cierta dosis de liberalización económica, pero también mantuvieron la solidaridad social y el papel regulador de la política. El crecimiento y la productividad se han mantenido en niveles altos desde mediados de los años noventa en Suecia.

La «flexibilidad» y la solidaridad guardaban una estrecha relación. Pero había una premisa social: el 85 por ciento de los trabajadores suecos están afiliados a los sindicatos. Este dato estadístico aparta drásticamente a Suecia de Francia. Una medida como el CPE tal vez no habría sido tan controvertida si Francia hubiese combinado la sindicalización con el principio, enunciado en el programa de los socialdemócratas suecos para 2004, según el cual «los intereses económicos nunca tienen derecho a poner límites a la democracia; la democracia siempre tiene derecho a fijar las reglas de la economía y a poner límites al mercado». Si los socialistas franceses inventasen una combinación programática similar, darían con una fórmula neo-blumiana para ejercer el poder en una época neoliberal. Deberán competir con un centro-derecha a la busca de un De Gaulle post-gaullista en la convulsa Quinta República ■

□ Traducción de Gustau Muñoz

María González,
una imagen de
«Proyecto fotográfico
sobre urbanismo»

